

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: LUZ ADRIANA GAÑAN ESTRADA
DEMANDADO	: ACROPOL EU y COLFONDOS
TIPO DE PROCESO	: EJECUTIVO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-006-2017-00149-01
RADICADO INTERNO	: 076-23
DECISIÓN	: CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 119

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

En sentencia del 28 de febrero de 2014, (fls 192 y ss del expediente digital), emitida por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión de Medellín, se dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR que entre la señora LUZ ADRIANA GANAN ESTRADA y la accionada ACROPOL E.U. existió una relación laboral regida por un contrato a término indefinido que inicio el 25 de noviembre del año 2008 y culminó el 7 de diciembre del año 2009.
SEGUNDO: DECLARAR que el contrato laboral que unio a la señora LUZ ADRIANA GANAN ESTRADA y la accionada ACROPOL E.U culminó por un despido indirecto imputable al empleador.
TERCERO: CONDENAR a la accionada ACROPOL E.U. a pagar a la señora LUZ ADRIANA GANAN ESTRADA la suma de quinientos seis mil ochocientos treinta y siete pesos (\$506,837) por concepto de indemnización por despido sin justa causa.
CUARTO: CONDENAR a ACROPOL E.U. a, previo calculo actuarial realizado por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, realice los pagos correspondientes a los aportes en pensión a favor de la señora LUZ ADRIANA GANAN ESTRADA que debieron

realizarse en el transcurso de la relación laboral, es decir, entre el 25 de noviembre del año 2008 y el 7 de diciembre del año 2009.

QUINTO: ORDENAR a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS realizar el cálculo actuarial ordenado y allegar los valores que se paguen al fondo de ahorro individual de la señora LUZ ADRIANA GANAN ESTRADA.

SEXTO: CONDENAR a la accionada ACROPOL E.U. a pagar a favor de la demandante la sanción establecida en el artículo 65 del C.S.T. correspondiente a un día de salario por cada día de retraso en el pago de la indemnización por despido sin justa causa, desde la fecha de culminación de la relación laboral y hasta el momento en que pague la obligación total.

SEPTIMO: CONDENAR a la accionada ACROPOL E.U. a pagar desde del 15 de febrero del año 2009 la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación de las cesantías a un fondo pensional, y hasta que realice la consignación de las mismas.

OCTAVO: DECLARAR implícitamente resueltas las excepciones propuestas por la parte accionada.

NOVENO ABSOLVER de las demás pretensiones invocadas en el libelo gestor.

DECIMO: CONDENAR en agendas en derecho a la parte accionada a pagar al demandante la suma de trescientos cuatro mil pesos (\$304,000) estas se fijan de conformidad con la ley 1395 del año 2010 la que en su Artículo 19 modifica los numerales 1 y 2 del artículo 392 del código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por la Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Y A favor del accionado COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS deberá cancelar la accionada la suma de doscientos cinco mil pesos (\$205,000)”

Ante los recursos de apelación interpuestos esta Sala mediante providencia del 22 de abril de 2016, (fls 222 y ss del expediente digital), dispuso lo siguiente:

“**PRIMERO: MODIFICAR** la decisión de primera instancia, en la que se reconoció la indemnización moratoria por el no pago de la indemnización del despido sin justa causa, para en su lugar **CONDENAR** a la sociedad ACROPOL E.U a reconocer y pagar la suma de \$16.563,00 diarios, desde el 8 de diciembre de 2009 (día siguiente a la terminación del contrato de trabajo) hasta cuando se acredite el pago de las cotizaciones de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por los salarios de los 3 meses anteriores a la terminación, de conformidad con las razones señaladas en primera instancia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia de fecha y origen conocidos, pero por las razones invocadas en esta instancia”.

Posteriormente como la accionada no había cumplido con lo dispuesto en las sentencias mencionadas y previa solicitud de la parte demandante el juzgado por auto del 31 de mayo de 2018, (fls 248 y ss del expediente digital), libró mandamiento de pago a favor de la señora Luz Adriana Ganan

Estrada, y en contra de Industrias de Refrigeracion Acropol E.U., por los siguientes conceptos:

- Por la suma de \$16.563 diarios desde el 08 de diciembre de 2009 hasta cuando se acredite el pago de las cotizaciones de los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones por los salarios de los tres meses anteriores a la terminación del contrato.
- Por la sanción del artículo 99 de la Ley 50/90 desde el 15 de febrero de 2009 hasta que se realice la consignación de las cesantías.
- Por las cotizaciones adeudadas a Colfondos Pensiones y cesantías S.A. conforme a la liquidación que el fondo realice.
- Por la suma de \$4.725.430 por concepto de costas procesales impuestas en primera instancia. Por los intereses legales sobre las costas desde el 2 de junio de 2016 hasta que se acredite el pago de las mismas.

Así mismo libró mandamiento de pago a favor de la señora Luz Adriana Ganan Estrada, y en contra de Colfondos Pensiones y cesantías S.A. por la obligación de hacer el cálculo actuarial correspondiente a los aportes en pensión de la señora Ganan Estrada entre el 25 de noviembre de 2008 y el 7 de diciembre de 2009.

COLFONDOS, luego de notificarse, da contestación al mandamiento de pago librado por el Juzgador proponiendo las siguientes excepciones de mérito: pago total de la obligación, prescripción, compensación y pago. Además, solicita que se archive el proceso teniendo en cuenta el pago total de la obligación realizado previamente.

Y la Dra, MONICA SANDRA LOPEZ PEREAÑEZ como curadora ad litem del ejecutado Industrias de Refrigeración Acropol E.U al dar contestación a la demanda propuso la excepción de prescripción frente a las pretensiones 1, 2, 4, 5, 6 y 7.

DECISION DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante providencia del 08 de marzo de 2023 al resolver las excepciones propuestas el juzgado dispuso lo siguiente:

“Primero. Prospera excepción de prescripción del derecho de la señora Luz Adriana Gañan Estrada al pago de cesantías y la sanción

del art. 99 de la ley 50/90; al pago de sanción de \$16.563 pesos diarios causados hasta el 8/7/2019; al pago de \$4.725.430 pesos por concepto de costas procesales impuestas en el proceso ordinario y los intereses legales sobre dichas costas.

Segundo. Continuar con la ejecución en contra de Industrias de refrigeración Acropol E.U. para el pago forzado de \$16.563 pesos diarios desde el 9 de julio de 2019 hasta cuando se acredite el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones de los tres meses anteriores a la terminación del contrato de trabajo.

Tercero. Declarar infundadas las excepciones de pago, compensación y prescripción propuesta por Colfondos contra el auto mandamiento de pago librado y a favor de la señora Luz Adriana Gañan Estrada.

Cuarto. Continuar la ejecución en contra de la AFP Colfondos S.A. para que en término de un mes emita con destino al empleador Industrias de Refrigeración Acropol E.U. y allegue copia a este proceso, cálculo del monto de los aportes generados a cargo de dicho empleador y a favor de la cuenta pensional de la señora Gañan Estrada, entre el 25 de noviembre de 2008 y el 7 de diciembre de 2009 con sus intereses moratorios hasta la fecha de liquidación, la que hará con el SMMLV para los años a liquidar.

Quinto. Continuar con la ejecución en contra de Industrias de Refrigeración Acropol E.U. para el pago forzado del cálculo del monto de los aportes generados a su cargo y a favor de la cuenta pensional de la señora Gañan Estrada, entre el 25 de noviembre de 2008 y el 7 de diciembre de 2009, con sus intereses moratorios hasta la fecha de liquidación que le emita la AFP Colfondos S.A”.

RECURSO DE APELACION.

Inconforme con la decisión anterior, la apoderada de la **parte ejecutante** interpuso recurso de apelación manifestando que se libró mandamiento de pago por auto del **31 de mayo del 2021** y que se libró una medida cautelar consistente en oficiar a la superintendencia financiera para que informaran los productos financieros a nombre de la ejecutada y en oficio del **31 de mayo del 2018** se dirigió a la superintendencia financiera de Colombia el cual fue entregado el 12 de junio del 2018 por lo que la parte ejecutante solicitó el **6 de junio del 2018** una adición al mandamiento de pago por intereses de mora lo que quiere decir que estaba pendiente la ejecutoria definitiva del mandamiento de pago.

Qué previo a resolver la solicitud de adición del mandamiento el juzgado requirió para estimar razonablemente los perjuicios solicitados y luego la parte ejecutante desistió de los perjuicios moratorios, pero no de la adición al mandamiento y el despacho resolvió esta solicitud por auto el **19 de septiembre de 2018** por lo que en dicho momento quedó en firme el auto que libró el mandamiento de pago.

Que el **22 de junio del 2018** Trans Unión dio respuesta al oficio de medida cautelar y señaló posibles productos financieros de la ejecutada, y las entidades donde posiblemente tenía productos financieros fueron requeridas para acoger la medida cautelar, y a la fecha no todas las entidades dieron respuesta al oficio, y que por esta razón estaba pendiente la notificación del auto por medio del cual se libró mandamiento de pago según el artículo 295 del código general del proceso.

Que atendiendo a que el despacho ordenó notificar por auto del 2 de diciembre de 2021 la parte procedió a dar cumplimiento a dicha orden y ante la imposibilidad de hacer la notificación solicitó emplazamiento y que se nombrara curador, el despacho resolvió la solicitud favorablemente el 27 de abril del 2022 y una vez se determinó quién sería la curadora se procedió a notificar.

Que por lo tanto es evidente que al estar pendiente la materialización de la medida cautelar no se hacía necesario notificar el auto por medio del cual se libró un mandamiento de pago y se decretó la medida, pero lo hizo según la orden del despacho y que por esto no está llamada a prosperar la excepción de prescripción solicitando sea revocada la providencia de primera instancia y se ordene continuar con la ejecución.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de la **parte demandante** solicita se REVOQUE la decisión de primera instancia del día 8 de marzo de 2023 y en su lugar se ordene continuar con la ejecución por los conceptos de: pago de cesantías y sanción; sanción de \$16.563 diarios causados desde el 8 de diciembre de 2009 hasta el pago de los aportes en pensiones; el pago de \$4'725.430 por concepto de costas procesales del proceso ordinario y los intereses legales sobre las costas.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Para resolver, es de resaltar que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los Artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los Artículos 65 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más en la primera instancia.

Se centra el problema jurídico en determinar si hay lugar a declarar o no la prescripción frente a las acreencias pretendidas de la ejecutada ACROPOL E.U problema que se abordará en el siguiente orden.

1. Forma de notificación del mandamiento de pago en ejecutivo conexo.

No sobra advertir que se está en este evento ante un proceso ejecutivo laboral en el cual se pretende el cobro forzoso de las obligaciones derivadas de una sentencia judicial, proferida el 28 de febrero de 2014 por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión de Medellín y luego modificada y confirmada por la Sala Primera de Decisión Laboral de esta corporación mediante fallo del 22 de abril de 2016.

Ahora bien, es conveniente precisar, como antecedente en este asunto, que dentro de las actuaciones correspondientes al proceso ordinario que dio origen a la ejecución, se profirió el auto por el cual se ordenó cumplir lo resuelto el **25 de mayo de 2016** y el apoderado de la parte ejecutante presentó solicitud de ejecución el **15 de febrero de 2017**, lo que indica que se trata de un ejecutivo conexo a continuación de ordinario laboral.

Situación que se halla regulada en el artículo 306 del C.G.P, el cual resulta aplicable a la jurisdicción del trabajo y la seguridad social y que en lo pertinente se transcribe:

“ARTÍCULO 306. EJECUCIÓN. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.

Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente”. (subraya de la Sala).

(...)

Partiendo de lo anterior, es necesario precisar que la norma aplicable en estos casos es el artículo 306 antes mencionado y no el artículo 108 del C.P.T y ss, pues dicho artículo del procedimiento laboral se aplica solo cuando de ejecutivos simples se trata y no de ejecutivos conexos como es el caso que nos ocupa.

La anterior postura es una reiteración de esta Sala, así como de la doctrina jurídica en Colombia¹, el dar aplicación al artículo 306 ya referenciado.

Igualmente, importa invocar la postura que al respecto tuvo la Corte Constitucional en sentencia T-565 de 2006, en la cual asentó lo siguiente:

“El artículo 108 del Código Procesal del Trabajo si bien establece la obligación de surtir la notificación personal del mandamiento de pago en los juicios ejecutivos, no se concibe a la luz de los principios de economía y celeridad procesal, como una formalidad específica que resulte exigible en aquellos casos en que se adelanta la ejecución de las providencias judiciales ante el mismo juez de conocimiento y entre las mismas partes, por el contrario, su ámbito normativo presupone el inicio de un proceso autónomo e independiente de aquél en que se impuso la condena objeto de reclamación. Obsérvese cómo, su misma ubicación en el citado Estatuto Procesal es indicativo de dicha realidad, ya que además de hacer parte del capítulo XVI referente a los “procedimientos especiales” que surgen como contrapartida al procedimiento cognoscitivo, frente al cual la ejecución subsiguiente no es más que una prolongación; supone como requisito previo para su plena exigibilidad judicial, la interposición de una demanda ejecutiva ante el juez laboral competente (C.P.T. art. 101), requerimiento que no resulta compatible con el trámite procedimental para la ejecución de providencias judiciales ante el mismo juez de conocimiento, para el que basta una simple petición para que se profiera el mandamiento ejecutivo (C.P.C. art. 335).

(...)

“Al tener que acudir al auxilio de la analogía, surgen dos posibles alternativas válidas para las autoridades judiciales, por una parte, pueden aplicar la misma regla jurídica prevista en la “ejecución como proceso autónomo” para el caso de “la ejecución a continuación dentro del mismo expediente”, lo que, en términos prácticos, significaría exigir la notificación personal consagrada en el artículo 108 del Código Procesal del Trabajo; o por la otra, remitirse en su integridad al

¹ BOTERO ZULUAGA, Gerardo. Guía teórica y práctica de derecho procesal del trabajo y de la seguridad social. Ediciones jurídicas Ibáñez, quinta edición, Bogotá D.C., 2013. pp. 475: “El auto que libra el mandamiento de pago se debe notificar personalmente al ejecutado, diligencia que por obvias razones se debe cumplir solo una vez se han practicado las medidas previas de embargo y secuestro de bienes, a menos que, se trate de un proceso ejecutivo iniciado a continuación de uno ordinario dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según el caso, en donde el mandamiento de pago se notifica por estado. Todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social en concordancia con el artículo 335 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 35 de la Ley 794 de 2003, que ahora corresponde al artículo 306 del Código General del Proceso”

procedimiento establecido en el Estatuto Procesal Civil, en los artículos 335 y subsiguientes, el cual al regular una situación jurídica-procesal exactamente igual, permitiría acudir a la notificación por estado como regla positiva para suplir el vacío normativo que en este tipo especial de procedimientos se presenta en el Código Procesal Laboral. Por lo demás, esta última alternativa también se fundamenta, en el hecho de reconocer que el régimen laboral exige en el artículo 41, literal a), numeral 1°, la notificación personal de la “primera providencia que se dicte” en el proceso, la que en tratándose de la ejecución subsiguiente, corresponde frente al demandando, a la del auto admisorio de la demanda. En estos casos, el auto ejecutivo, debe notificarse por estado, siguiendo las reglas de notificación de los autos interlocutorios, cuando éstos no se hubieren dado a conocer en estrados (C.P.L. art. 41, lit. c), num. 1°). Finalmente, aun cuando la mayoría de la doctrina guarda silencio sobre la materia, en algunos textos sí se hace referencia expresa a que, en estos eventos, lo procedente es la notificación por estado del mandamiento ejecutivo” (subraya de la Sala).

Y en pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STL7345-2015, con radicado 59409, del 10 de junio de 2015, M.P, Dr, JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ, ha expresado que:

“(…)

De cara a los supuestos esbozados, advierte la Corte, que el amparo pretendido no tiene vocación de prosperidad, por cuanto en el presente caso se trata de un proceso ejecutivo que se sigue a continuación del proceso ordinario, en los términos del CPC art. 335 modificado por el L.794/2003 art.35 y aplicable por analogía CPT y SS art. 145, por ello, se tiene que el auto de mandamiento de pago no se concibe como la primera providencia y por ende, su notificación debe surtirse por estados.

“(…)

Aunado a lo anterior, tampoco se observa que en la notificación del mandamiento de pago, el despacho haya incurrido en irregularidad alguna, toda vez que, según lo afirma el propio tutelante, ésta se hizo por estado, lo que guarda conformidad con las previsiones del CPC art. 335 inc.2. Así entonces, como se trató de un proceso ejecutivo seguido del ordinario no se requería que la orden de apremio fuera notificada personalmente, como lo arguye erradamente el tutelante y ejecutado”

Partiendo de lo anterior, deja claro la Sala que para el caso en concreto como se trata de un ejecutivo conexo, la notificación al demandado debe hacerse de forma personal y no por estados al tenor de lo dispuesto en el artículo 306 del C.G.P, toda vez que entre el auto de obediencia a lo resuelto por el superior y la presentación de la demanda ejecutiva transcurrieron más de 30 días.

2. De la prescripción.

Al respecto el C.S.T. en el Art. 488 establece:

“Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código prescriben en tres (3) años, que se cuenta desde que la

respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripción especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.”

Igualmente, el artículo 151 del CPT y de la SS

“ART. 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.

Por su parte el artículo 94 del C.S.G establece con respecto a la interrupción de la prescripción lo siguiente:

“ARTÍCULO 94. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad **siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante.** Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.

La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo se producirán a partir de la notificación.

La notificación del auto que declara abierto el proceso de sucesión a los asignatarios, también constituye requerimiento judicial para constituir en mora de declarar si aceptan o repudian la asignación que se les hubiere deferido.

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos.

El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez”.

Ahora, en relación con la notificación de la demanda en los términos dispuestos por el artículo 94 del C.G.P, (antes artículo 90 del C.P.C), para que se entienda interrumpida la prescripción ha expuesto la Corte Suprema de justicia que el término de notificación de la demanda dentro del año siguiente no debe mirarse de forma automática sino que el juez debe evaluar si la tardanza en la notificación obedeció a la conducta negligente del actor o si, por el contrario, tuvo que ver con el proceder del despacho judicial o el de la demandada.

Lo anterior ha sido expuesto por la Corte Suprema de justicia entre otras en reciente providencia con radicado SL3788 del 30 de septiembre de 2020 en la que se indicó:

“La solución al problema planteado se hace partiendo de los supuestos de que la demanda fue presentada el 28 de mayo de 2008 (vto. f.º220 cuaderno principal) y la notificación del auto admisorio de la demanda se hizo el 2 de septiembre de 2011 (f.º524, cuaderno nº2 del cuaderno principal). De acuerdo con esto, para la fecha de presentación de la demanda estaba vigente el art. 90 del CPC modificado por el art. 10 de la L 794 de 2003 que dice:

ARTÍCULO 90. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.

La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes.

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo, se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos.

Ciertamente, como lo dice la censura, los efectos de la interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda que prevé el art. 90 del CPC (cuya aplicación al procedimiento laboral es aceptada por la jurisprudencia laboral vigente, verbigracia sentencias CSJ SL 3693-2017 y SL2532-2018) están condicionados a que la notificación al demandado del auto admisorio se efectúe dentro del año siguiente a la notificación de ese auto a la parte actora.

No obstante, la jurisprudencia laboral también tiene establecido que la condición consistente en realizar la notificación al demandado dentro del plazo concedido por el legislador no se aplica literalmente, de forma automática, es decir, con el simple conteo de términos, pues, de acuerdo con el *principio de interpretación conforme* que ha de orientar en todo caso la interpretación de la ley según el art. 4 de la Constitución, el juzgador debe evaluar si la tardanza en la notificación obedeció a la conducta negligente del actor o si, por el contrario, tuvo que ver con el proceder del despacho judicial o el de la demandada.

En este sentido, se adopta en sede de casación el criterio de la Sala que impregnó la decisión de instancia de la sentencia CSJ SL 4578-2014, donde, a pesar de que el auto admisorio de la demanda fue notificado luego de transcurrido más de los 120 días de que trataba el artículo 90 del CPC (esto fue antes de la modificación introducida por el art. 10 de la Ley 794 de 2003), la Corte tomó la fecha de la presentación de la demanda para dar por interrumpida la prescripción, porque tuvo en cuenta que la tardanza en la notificación no fue por culpa del demandante, en la medida en que, ante la renuencia del demandado a comparecer, el juez debió impulsar oficiosamente el proceso, art. 48 del CPT y SS, mediante el nombramiento de curador y hacer, a través de este, la notificación correspondiente, sin que fuera necesaria la petición de parte, ya que no fue el caso de que la dirección de la contraparte indicada en la demanda no existiera, en tanto que, por el contrario, el informe del citador indicaba que sí existía; además que el actor había cumplido con su carga de aportar todos los medios necesarios para que se diera la respectiva notificación.

Partiendo de lo mencionado se tiene lo siguiente para el caso bajo estudio:

- El auto de obedézcse y cúmplase lo resuelto por el superior fue emitido el **25 de mayo de 2016**.
- la demanda ejecutiva fue presentada el **15 de febrero de 2017** por lo que se tiene que la misma fue presentada dentro de los 3 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
- El mandamiento de pago fue librado el **26 de julio de 2018**, y la solicitud de adición de mandamiento de pago fue resuelta por auto del **19 de septiembre de 2018**, (fls 326 del expediente digital)

Conforme lo descrito se tiene que a partir de esta última providencia comenzó a correr el término de un año para interrupción de la prescripción para que dentro del mismo se cumpliera con la notificación personal a la ejecutada, el cual venció el 19 de septiembre de 2019.

Partiendo de la jurisprudencia transcrita aplicada al caso bajo estudio se tiene que no existe dentro del proceso prueba alguna que lleve a inferir que la parte ejecutante haya realizado acciones tendientes a notificar la demanda ejecutiva dentro del año siguiente al auto que libró el mandamiento ejecutivo y que resolvió la solicitud de adición del mismo, esto es, entre el 19 de septiembre de 2018 al 19 de septiembre de 2019, sin que sirva como sustento a dicha inactividad el argumento esgrimido por la parte ejecutante relacionado con que no se habían concretado las medidas cautelares pues dicha tesis no cuenta con soporte normativo alguno, por lo que concluye la Sala que la notificación del mandamiento pago de la referida demanda ejecutiva no se hizo dentro del año siguiente a la presentación del libelo a la ejecutada ACROPOL E.U, toda vez que la misma solo fue notificada a través de curador solo hasta el **21 de julio de 2022**, no pudiéndose entender como interrumpida la prescripción por cuanto como no existió ninguna actividad de la parte dentro del año siguiente prescrito por el artículo 94 del C.S.G respecto a la notificación del ejecutado, dicha normativa tiene un condicionamiento, esto es, exige para que opere esta, que en el término de un año desde la emisión del mandamiento ejecutivo, se dé la notificación al ejecutante, lo que aquí no ocurrió.

Por lo anterior lo legal y pertinente será CONFIRMAR la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín mediante la cual se resolvieron las excepciones dentro del presente proceso ejecutivo.

Sin costas en esta instancia.

EL FALLO DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada de fecha y origen conocidos, proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, mediante la cual se resolvieron las excepciones dentro del presente proceso ejecutivo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, devuélvase el expediente al Juzgado de procedencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: La presente decisión se notificará por ESTADOS.

Los Magistrados,



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTANO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 086 del 23 de mayo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>